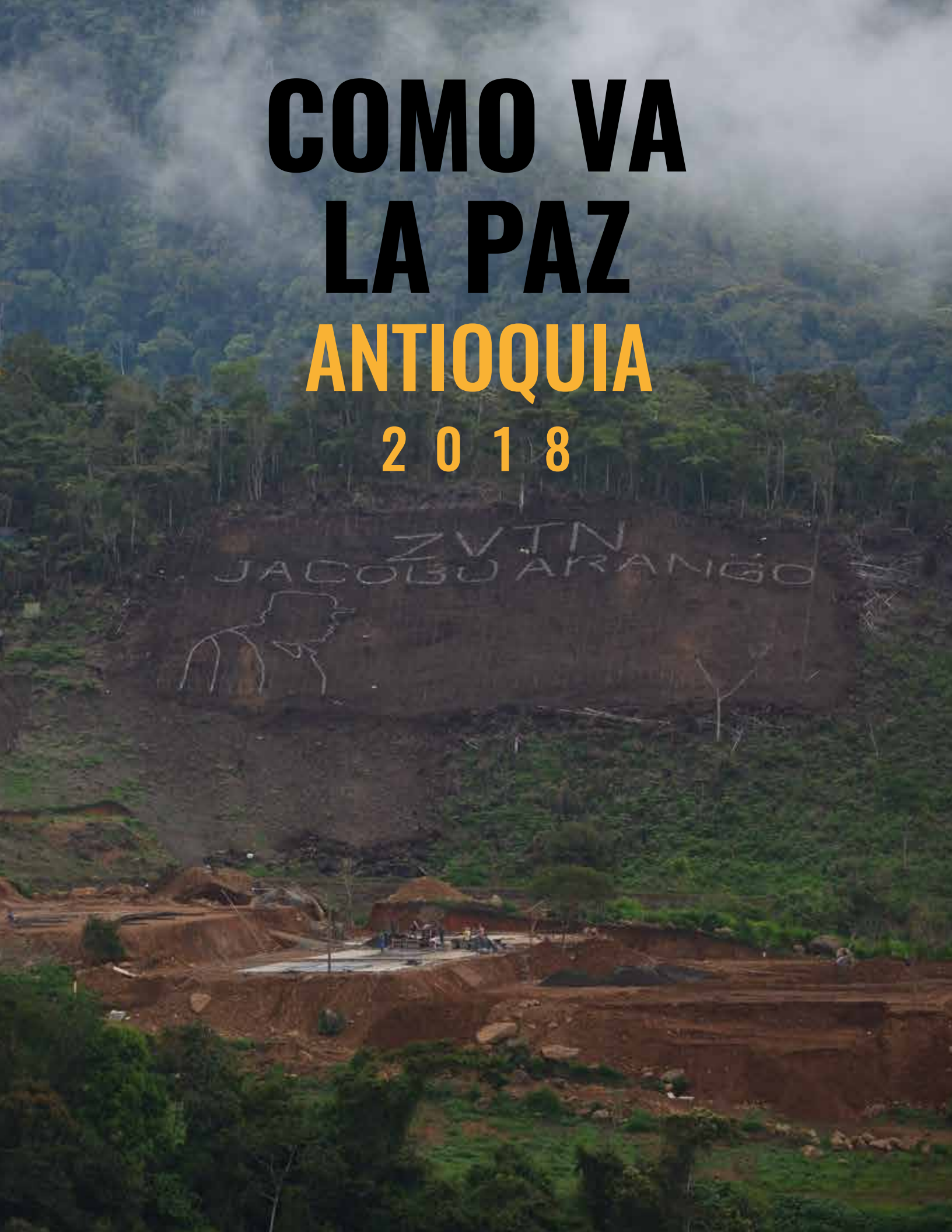


COMO VA LA PAZ

ANTIOQUIA

2018





León Valencia A.

Director

Ariel Ávila M.

Subdirector Académico

Carlos Montoya Cely

Coordinador de la línea de Paz y Postconflicto

Alejandro Restrepo

Investigador Nacional

Andrea Aldana

Investigadora Regional

LA TIERRA SALVAJE; BAJO CAUCA, NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

CONTENIDO

La tierra salvaje; Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño.....	1
Introducción.....	4
Bajo Cauca Antioqueño. El reciclaje de la guerra.....	6
De urabeños, usuga y clan del golfo; la estructura armada de la autodenominada Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC).....	8
Otros Grupos armados ilegales en el Bajo Cauca.....	10
Minería en Bajo Cauca. Entre el río y el oro.....	14
La amenaza de la paz. Entre el oro y la consolidación de grupos armados ilegales; Norte y nordeste Antioqueño.....	16
Alertaltuango.....	18
Economías ilegales en el norte y nordeste Antioqueño. La fiebre del oro.....	23
Cultivos de uso ilícito en el norte y nordeste antioqueño.....	25
Infraestructura para la paz; Acciones institucionales en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.....	26
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito.....	26
Reincorporación.....	28
Víctimas.....	30

LA TIERRA SALVAJE; BAJO CAUCA, NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

Introducción

Era predecible, aun cuando la firma de paz permitiera que todos los indicadores relacionados con la violencia disminuyera de manera sostenida; homicidios, desplazamiento forzado, desaparición forzada, víctimas por MAP o MUSE, reclutamiento forzado, etc. Los retos en materia de implementación del acuerdo no serían ajenos a la posibilidad de que se reanudaran o intensificaran en algunas regiones del país expresiones de violencia que fueran en contravía de las tendencias nacionales.

Dieciocho meses después de implementado el acuerdo de paz, podemos afirmar de manera categórica que pasamos de tener más de 250 municipios con altos niveles de violencia a un conjunto de 70 municipios que concentran diversas actividades que han hecho que las expresiones de criminalidad se reciclen. El Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño presentan características similares a las que se han observado en regiones como el pacífico nariñense, el Catatumbo o la región del Urabá; las economías ilegales siguen siendo el motor que permite la permanencia de las violencias; cultivos de uso ilícito, minería al servicio de la criminalidad, rutas estratégicas para el transporte y comercialización de drogas y armas y una precaria capacidad institucional para mitigar los efectos de expansión de organizaciones ilegales han hecho de esta región, uno de los nuevos epicentros de violencia en el país.

Las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las FARC. Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales

concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la FARC, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios.

Es por esta razón, que el texto a continuación es el resultado del trabajo de campo y análisis del contexto de los territorios, desde una perspectiva que permite captar las principales transformaciones de la realidad desde el inicio de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Los textos hacen especial énfasis en las dinámicas vinculadas con la seguridad y la identificación de las organizaciones criminales que mantienen el control de la ilegalidad, este ejercicio se hace sin desconocer los esfuerzos institucionales y los programas que como resultado del acuerdo de paz se han puesto en marcha en los últimos dieciocho meses de implementación.

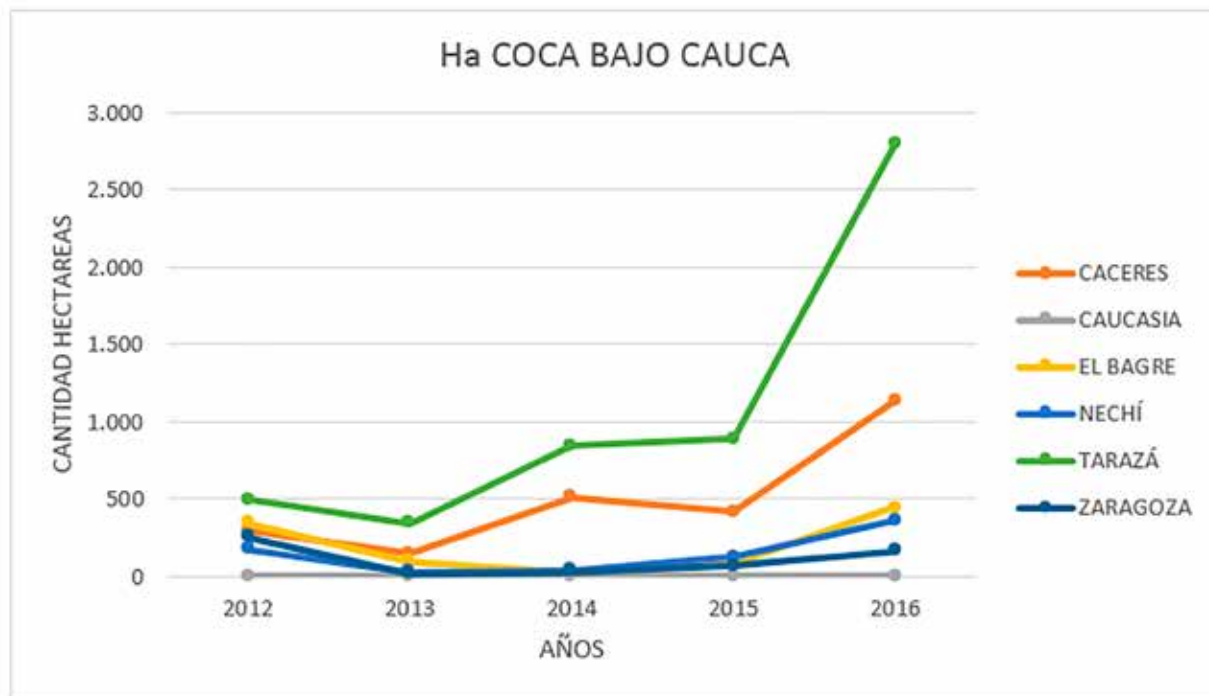
BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO. EL RECICLAJE DE LA GUERRA.

La subregión del Bajo Cauca se encuentra integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, los cuales abarcan 8.485 kilómetros cuadrados; el 13,5 por ciento del total del área departamental. Su territorio no sólo tiene yacimientos de oro que son explotados en minería de tipo aluvión y condiciones climáticas propicias para la siembra y cultivo de hoja de coca, sino que también cuenta con las particularidades geográficas que vuelven a esta subregión un corredor vial estratégico que conecta con Córdoba, Urabá, sur de Bolívar, el nudo de Paramillo, la costa caribe y el Valle de Aburrá (incluida, Medellín).¹ Tal vez las razones por las que hoy este parece ser el territorio que nadie controla; la “tierra salvaje” de Antioquia, como lo indican las cifras de desplazamiento forzado y el aumento de más del 150% por ciento en los homicidios en relación con el año anterior.

El control de estos mercados así como de las rutas del territorio, ha generado incontables guerras que continúan en el Bajo Cauca. Históricamente tuvo presencia la guerrillera de

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), pero en la década de los 90 aparecieron con fuerza las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que luego serían las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, las Auc.

Desde entonces, la violencia creció y el narcotráfico se desbordó, de manera paradójica la situación se complejizó a medida que avanzaban los logros obtenidos por el proceso de paz que adelantaba el gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc: una vez que las Farc se retiraron del territorio, en el año 2016, debido a su recogimiento en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), y al contrario de lo pensado, los cultivos de coca aumentaron en la zona como no se había visto en casi una década atrás, el Bajo Cauca antioqueño pasó a tener 15.627 Hectáreas sembradas de coca luego de que en 2013 había registrado su punto más bajo con sólo 2.355. Además, su anterior punto más alto había sido casi 10 años atrás, en 2008, cuando se registraron 13.653 hectáreas.

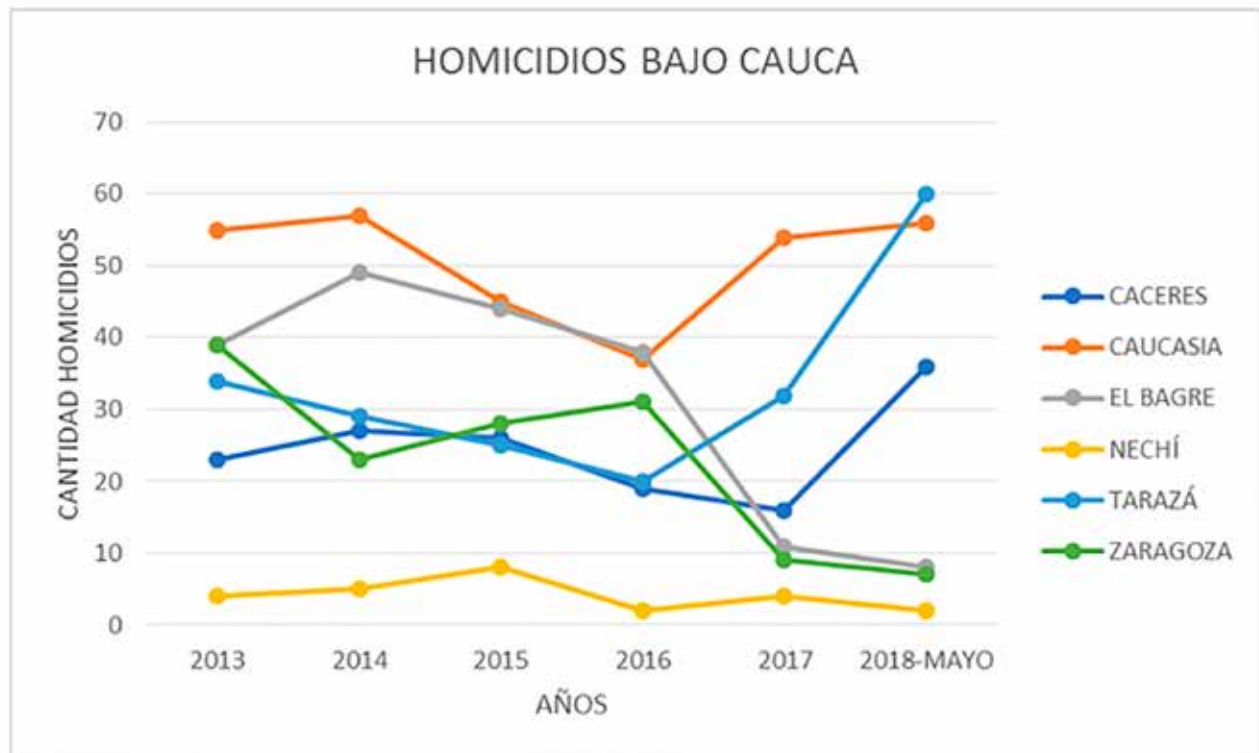


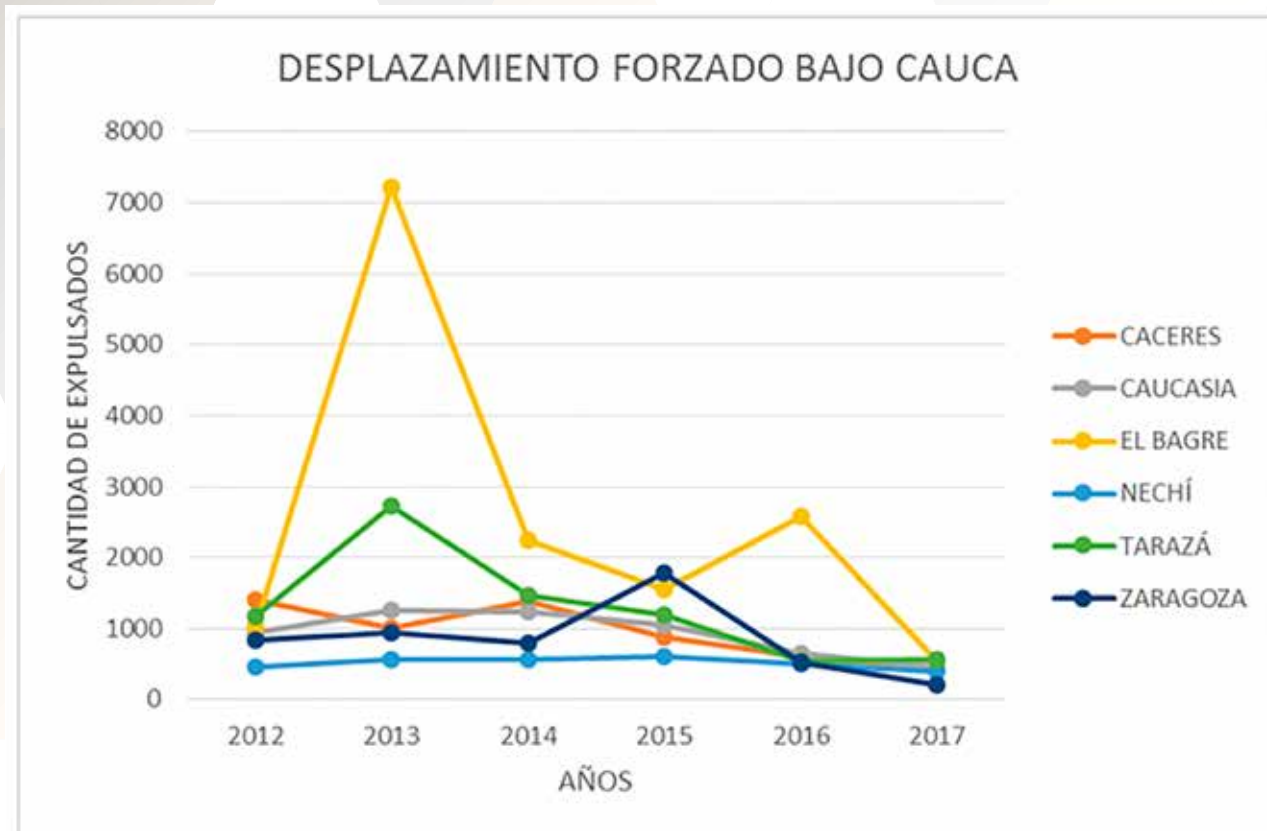
¹ Juan Diego Restrepo, 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el Bajo Cauca antioqueño, Fundación Ideas para la Paz (FIP), octubre de 2015, pág. 29. Consultar: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5617efbc18756.pdf>

Con la salida de las Farc del territorio, en esencia, también se pretendía una disminución de cultivos ilícitos, pero esto no ocurrió; el fenómeno fue al contrario, lo cual indicaba que el problema no era sólo este grupo guerrillero sino que había otras variables. Posteriormente, otro suceso se presentó: José Bayron Piedrahita Ceballos, el barón comercial del Bajo Cauca, fue incluido en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro Estados Unidos en mayo de 2016. Así mismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) manifestó que Piedrahita era “patrón de patrones” y que había “apoyado diferentes carteles de drogas por mucho tiempo incluyendo los de Cali y Norte del Valle y ahora a la Oficina de Envigado”. Al año siguiente, el 29 de septiembre de 2017, fue capturado en Caucasia. Piedrahita, se supo entonces, era en realidad el barón de la droga en el bajo Cauca, y de su mano financiera crecieron los cultivos, los ejércitos ilegales y las alianzas con los carteles mexicanos.

Piedrahita al parecer, era el hombre detrás del negocio en esta región. Un hombre de tanto

poder que controló hasta finales de 2017 todo el Bajo Cauca. En la investigación en terreno, fuentes que, ante el miedo a la represalia, piden su reserva de identidad, dan testimonio de que el hombre hizo alianza con carteles mexicanos y que fue clave en la llegada de estos a la subregión. Una vez capturado José Bayron Piedrahita Ceballos, la subregión volvió a entrar en disputa. La salida de Piedrahita del tablero ocasionó una guerra por el poder que, según las estadísticas de seguridad en Antioquia, emitidas por la Secretaría de Gobierno departamental, ya ha dejado más de 80 muertos (sumando los homicidios que han ocurrido después del corte). El corte va desde el 1 de enero hasta marzo 5 de 2018 y, en comparación con el mismo corte de 2017, los homicidios han aumentado en un 184,6%. Las muertes se concentran en Caucasia, Cáceres, Tarazá (ver Imagen 1 y 2) y éstas dos últimas llevan más de 800 casos de desplazamiento forzado en los últimos dos meses. La Defensoría departamental, incluso, emitió Alerta Temprana porque dice que el desplazamiento forzado viene con tendencia al aumento y prevén que serán casi 1800 personas las víctimas.





Los enfrentamientos se dan entre el “Clan del Golfo” y el grupo criminal conocido como “Caparrapos”, estructura que se dedica a la minería ilegal y al microtráfico. El 28 de marzo de 2018, durante un Consejo extraordinario de Seguridad el gobernador de Antioquia; Luis Pérez anunció que la Operación Agamenón II, desplegada

inicialmente para atender la inseguridad en la región de Urabá, se extenderá a Caucasia y municipios vecinos para retomar el orden público. El operativo, se supone, estará integrado por 1.430 soldados del Ejército y 1.400 efectivos policiales, además de unidades de Policía Judicial y helicópteros artillados con armamento especial.

DE URABEÑOS, USUGA Y CLAN DEL GOLFO; LA ESTRUCTURA ARMADA DE LA AUTODENOMINADA AUTODEFENSA GAITANISTA DE COLOMBIA (AGC)

Las AGC operan en el Bajo Cauca a través de cuatro frentes: el José Félix Reyes, el Lorenzo, el Julio César Vargas y el Libertadores del Bajo Cauca, los cuales conforman el Bloque Pacificadores del Bajo Cauca.² Y, actualmente, las Agc tienen la siguiente línea de mando en esa subregión³: Primer cabecilla, jefe de Bloque; segundo cabecilla, jefe de ala financiera: encargado del negocio del narcotráfico, compra la base de coca, la procesa en los “chongos” (laboratorios) y define los cargamentos que le serán entregados a los cárteles de Sinaloa, al nuevo narcotraficante

con presencia en el Bajo Cauca conocido como Montero, a quien presuntamente le vendieron una franquicia del negocio.

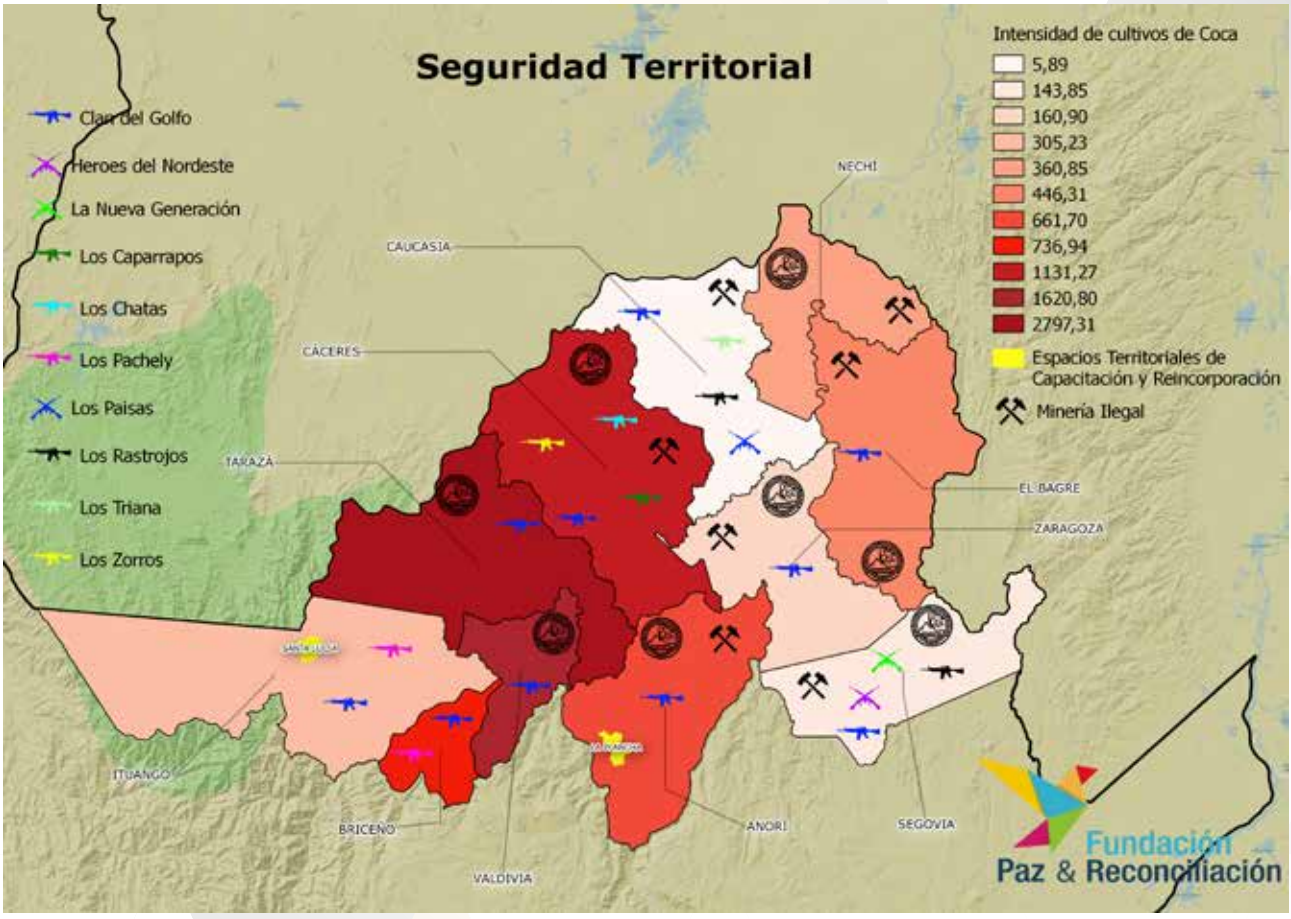
Tercer cabecilla, jefe de ala militar. Cuarto Cabecilla, encargado de logística y microtráfico, quien al parecer reside en el corregimiento de Guarumo. Hay un quinto cabecilla que se encargaría del reclutamiento. El sexto cabecilla es el jefe de sicarios y, presuntamente, reside en el corregimiento de Piamonte. Pertencería, además, a la escuela de sicarios creada por alias

²Juan Diego Restrepo, ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en el Bajo Cauca antioqueño, Fundación Ideas para la Paz (FIP), octubre de 2015, pág. 14. Consultar: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5617efbc18756.pdf>

³Análisis Urbano, En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente, 30 de marzo de 2017. Ver: <http://analisisurbano.org/en-el-bajo-cauca-el-crimen-deambula-libremente/>

el Arriero, quien fue capturado en diciembre de 2016 en Tarazá. Hay un séptimo cabecilla que se encarga de transmitir la ideología de las Agc en esta subregión —ideología que se encuentra trazada y descrita en en el apartado «estatutos

políticos» de la página web de esta organización criminal⁴— del que se desconoce su identidad real y hay un octavo cabecilla encargado de organizar cobros y extorsiones.



Alianzas de las AGC con La Oficina y los carteles mexicanos

La expansión de las Agc hacia el Bajo Cauca antioqueño se facilitó por la alianza que este grupo trabó con el ala de La Oficina que simpatizó con esta unión, aquella que era liderada por Tom —o Carlos— Chatas y que aún controla el Norte del Valle de Aburrá. Los Chatas, aliados también con los Pachelly, pactaron con carteles de mexicanos —a través de alias El Mexicano— y, según testimonio recogidos en territorio, se presume que los primeros habrían organizado la venta de una franquicia de las Agc, con la intermediación de un alias Chepe, para que estuviera disposición y uso de los mexicanos, franquicia presuntamente valorada en 8 mil millones de pesos.

Irineo Sánchez Romero, El Mexicano, era el integrante del cartel de Los Zetas —estructura mexicana de narcotráfico— que desde 2015 estaba encargado de los negocios de tráfico de drogas con las Agc y de gestionar la creación de una organización de crimen transnacional con base de operaciones no sólo en Urabá, sino también en el Bajo Cauca, región colombiana que, según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos que cada año publica la UNODC, produce el 39% de la coca que se da en la región Central del país.

⁴Ver: <http://autodefensasgaitanistasdecolombia.org/agc2/index.php/estatutos-agc>

No obstante, el Mexicano fue capturado en enero de este año y tras su captura en el territorio apareció otro narco al que llaman Montero, quien parece proceder de Barbosa (Antioquia) y tendría cercanía a Los Triana de Medellín y a La Oficina. Su alianza inicialmente fue con alias Seis-Siete (cabecilla de las AGC capturado), a quien supuestamente le compró una franquicia de la estructura para traficar con cocaína, la cual incluía los territorios de Piamonte y Tarazá. Ahora bien, al parecer Montero no pagó oportunamente dicha franquicia y esto le habría traído problemas con las AGC.

Esta alianza, que ya no deja duda en los territorios, y que también se está prestando para crear un nuevo cartel que se tome todo el Norte de Antioquia, fue trascendental a la hora de apoderarse de rutas y territorios del Bajo Cauca por parte de las Agc. No obstante, luego del asesinato de alias Inglaterra, fuentes afirmaron que esta se tomó como una traición a la alianza; habría sido Tom Chatas quien entregó y dio la ubicación de Inglaterra porque no estaría de acuerdo con la

repartición de territorios que pretendía generar Otoniel luego de su acogimiento a la justicia. Por lo anterior, es posible que la nueva guerra que se está dando en el territorio antioqueño obedezca al reacondicionamiento de lealtades y, por lo tanto, también se reajuste el control de los territorios en el escenario criminal. Para las Agc esto también dependerá de los avances de la operación Agamenón 2 y de ésta qué los debilite, pues ya acabó con la vida de Inglaterra, de Gavilán y del Indio —segundo, tercero y cuarto al mando de esta organización, respectivamente—, quedando vivos Otoniel y Nicolás, jefes de las Agc que se encuentran enfrentados entre sí.

A estas versiones, se suma la información recolectada en la zona norte de Antioquia en la cual también advierten de la formación y presencia de este nuevo cartel del norte de Antioquia, que era liderado por Tom Chatas antes de su captura, en alianza con la banda Pachelly, y que ahora estaría bajo el control de los segundos. Lo que indica que debe generarse una alerta, específicamente, sobre el incremento de este nuevo cartel.

OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN EL BAJO CAUCA

Para un mayor contexto, debe aclararse que las Agc no son los únicos grupos armados ilegales con presencia en la región. Acá se hace un recuento

de los grupos que también operan allí e, incluso, se mencionan los territorios en los que las Farc actuaba para una mejor lectura territorial.

TARAZÁ

Anteriormente contaba con presencia de los Frentes 18 y 35 de las Farc, pero esos territorios ahora han sido captados por miembros del Eln y de las Agc, especialmente en los corregimientos La Caucana, El Doce y Barro Blanco —en donde fue fuerte el Frente 18—, lugares en los que la siembra de cultivos ilícitos se incrementó de manera alarmante, pasando de 884,61 ha en el 2015 a 2797,31 ha en el 2016.

CÁCERES

En el corregimiento Piamonte, centro de operaciones de las Agc, hubo milicias de las Farc adscritas al Frente 35 pero hoy el control total es de las Agc, quienes, además, extendieron su presencia hacia Briceño y Valdivia, en donde tienen una alianza con la banda Los Zorros, banda subordinada al grupo de los Chatas del municipio de Bello.

EL BAGRE

En el corregimiento de Puerto López —zona de alta producción de base de coca— donde operó el Frente 57 de las Farc, hace presencia el Frente Compañero Tomás del Eln. Las Agc han hecho intentos de entrar a Puerto López pero han fracasado, cuando no son repelidos, son asesinados. El otro corregimiento, Puerto Claver, sí tiene presencia total de las Agc debido a la explotación minera ilegal, en donde controlan las dragas, el ingreso de maquinaria, el transporte de gasolina y el comercio del oro.

ZARAGOZA

En este municipio se encuentra activo el Frente de Guerra Noroccidental del Eln que opera a través del frente guerrillero Antonio Galán. El Eln, que desarrollaba su accionar en conjunto con los frentes 18 y 36 de las Farc, ahora actúa solo y cobra “impuestos” (“vacunas”) sobre la actividad de la minería ilegal y sobre la producción y el procesamiento de la coca. No obstante, la presencia de las Agc en el territorio es alta y va en aumento, puesto que este grupo está asentado y tiene centro de operaciones en el corregimiento de Liberia del Charcón del municipio de Anorí, municipio con el Zaragoza limita al oeste.

De hecho, la disputa por el territorio entre Agc y Eln ha dejado secuelas de enfrentamientos armados y, según la batería de datos suministrada para esta investigación, Zaragoza fue la región que más asesinatos presentó a lo largo de 2016, registrando 26 homicidios; cinco de ellos a cargo de grupos armados ilegales, uno de la fuerza pública y los 19 restantes no tenían información clara del agresor.

NECHÍ

Se tiene información de que el Eln hace presencia por la cercanía con el Sur de Bolívar y los municipios de San Jacinto del Cauca y Montecristo. Por otro lado, las Agc pasaron a ocupar los territorios que controlaban las Farc en la vereda Las Flores y en veredas que limitan con Zaragoza, en donde, en el pasado, hubo una suerte de pacto de no agresión entre Eln, Farc y Agc para el control de las actividades que involucra el narcotráfico.

CAUCASIA

Este municipio siempre ha contado con una fuerte presencia paramilitar, y desde la desmovilización de las Auc, Caucasia tuvo una reincidencia de 60 desmovilizados del Bloque Central Bolívar⁵ que continuaron la actividad criminal. Hoy el territorio es controlado en su totalidad por las Agc quienes, incluso, han demostrado su autoridad sobre la región por medio de paros armados, como el ocurrido el 31 de marzo⁶ y el 1 de abril de 2016, en el que bloquearon y aislaron al municipio.

Así mismo, no debe descartarse que Caucasia es el municipio de la subregión del Bajo Cauca que más sufre la presión de armada de las Agc. En el 2016 se registraron 19 homicidios de los que no se aportó información clara sobre el perpetrador y, con una diferencia numérica enorme del resto de municipios del Bajo Cauca, según la Policía Nacional (Ponal), Caucasia también registró 93 personas amenazadas ese año; El Bagre fue el segundo municipio más amenazado de esta subregión y sólo registró 22 casos⁷.

⁵Juan Diego Restrepo, 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' en el Bajo Cauca antioqueño, Fundación Ideas para la Paz (FIP), octubre de 2015, pág. 14. Consultar: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5617efbc18756.pdf>

⁶El Espectador, Paro armado del Clan Úsuga aterroriza a poblaciones en Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar, 31 de marzo de 2016. Ver: <https://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-ateroriza-poblaciones-antio-articulo-624775>

⁷Cifras tomadas de la batería de datos para esta investigación.

Presencia de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca

La fuerza pública tiene presencia en esta subregión a través del Ejército Nacional, con el **Batallón Aerotransportado N° 31 Rifles**, ubicado en jurisdicción de Cáceres, el cual realiza operaciones en Caucasia, Cáceres y Tarazá. También está el **Batallón Especial Energético y Vial N° 5 General Juan José Reyes Patria**, con sede en El Bagre, y opera en los municipios de Nechí y Zaragoza. Y en la zona rural de los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre,

Nechí y Zaragoza operan de manera conjunta las **Columnas Móviles 24** (del Batallón Rifles) y **25** (del Batallón Especial).

El Gula Militar Bajo Cauca, también se encuentra en la subregión y tiene sede en Caucasia, realiza operativos consecutivos para desarticular la red de expendedores de microtráfico y para llevar a cabo capturas de integrantes de la cúpula de las AGC.

Guerras recicladas en el Bajo Cauca

El Bajo Cauca está pasando por un momento crítico en cuanto a seguridad y orden público. La zona se la están disputando cuatro grupos que se pelean tanto las rutas de la salida del narcotráfico, especialmente el sur de Bolívar y Guarandá (Sucre), como el control de los cultivos y el poder territorial. No obstante, también hay minería de oro y en el sector prima la de tipo aluvión. Los cuatro grupos se denominan: Caparrapos, Paisas, Rastrojos y Agc Bloque Pacificadores de Bajo Cauca (también llamados Urabeños o Clan del Golfo); y estos últimos, además, están teniendo disputas internas porque esta organización a nivel nacional también las está teniendo, según información obtenida en campo, los carteles mexicanos estarían detrás, manipulando intereses de mercado e interfiriendo en esta disputa.

El efecto de la violencia lo están recibiendo los municipios de Valdivia, Caucasia, Tarazá y, especialmente, Cáceres. La violencia viene como un efecto dominó en expansión y, según Defensoría del Pueblo, los municipios en los que seguirá el espiral violento son Zaragoza y El Bagre.

Por ahora, el municipio más afectado es Cáceres, que al último día de febrero de 2018 ya contaba con 822 personas desplazadas de 9 de sus veredas por causa de los combates entre los grupos mencionados, especialmente los internos de las Agc. El primer desplazamiento forzado ocurrió el 19 de enero en las veredas El Tigre, Campanario y Ponciano Alto, Ponciano Bajó y Alto Tamaná; 532 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. El segundo desplazamiento forzado fue el 30 de enero y salieron 125 personas de las mismas veredas, en especial de Campanario, que cuenta con comunidad indígena Zenú. El tercero fue el 13 de Febrero, de la vereda El Calvario,

que comunica con veredas de Tarazá, tuvieron que desplazarse forzosamente 50 personas que sumaban 19 familias. La Defensoría emitió Alerta Temprana porque dice que el desplazamiento forzado viene con tendencia al aumento por eso prevén que serán casi 1800 personas las víctimas de este flagelo.

Otros sitios en delicada situación de seguridad es el sector de Pia Monte, entre Jardín y Guarumo, este corredor es, según información recogida en campo, "un nido" de paramilitares que dejó o le heredaron a Carlos Mario Jiménez (alias "Macaco") y que ahora está en disputa por las bandas mencionadas. Igualmente, y se pudo comprobar en el viaje realizado para esta investigación, los municipios y corregimientos de Caucasia, Cáceres y Tarazá sufren un fuerte control social. Lugares como Cáceres, Jardín y Puerto Bélgica tienen una suerte de toque de queda y a partir de las 6 o 7 p.m., depende del sector, los habitantes deben guardarse en sus casas por orden de un grupo ilegal. Los mensajes intimidatorios llegan por correo humano, correo voz a voz o vía whatsapp, casi siempre este último. La investigadora constató que en Cáceres, por ejemplo, desde las 6:30 pm, el territorio parece un pueblo fantasma y en las calles sólo circulan sujetos en motos de y extraños aspectos, todos hombres.



Víctimas del desplazamiento forzado masivo de febrero de 2018 en el Bajo Cauca. Foto: Andrea Aldana.



Víctimas del desplazamiento forzado masivo de febrero de 2018 en el Bajo Cauca. Foto: Andrea Aldana.

Ante el drama de esta subregión, las autoridades intentaron resultados: entre el 21 y 30 de enero y el 6 de marzo de 2018, han sido capturados una docena de supuestos integrantes del Clan del Golfo y de los caparrapos que allí delinquirán. El 27 de febrero fue dado de baja Donaldo Antonio Mercado González, alias El Viejo o Polocho, en enfrentamiento con policía de Carabineros. Sobre estos operativos. En cuanto a orden público, en

Tarazá, especialmente en Corregimiento de Barro Blanco y en el Doce, se viene un paro campesino inminente, debido a los incumplimientos de los acuerdos suscritos en La Habana en materia de sustitución voluntaria de cultivos y a la guerra e inseguridad que se está viviendo por parte de las bandas criminales posdesmovilización paramilitar que azotan la región.

Minería en Bajo Cauca

De los municipios del Bajo Cauca en donde ha habido importantes yacimientos y una explotación, producción y transporte de oro son Cáceres y Zaragoza, en donde hubo incursión de compañías extranjeras: Francesa del Nechí, Pato Consolidated y Frontino Gold Mines, en las dos primeras décadas y principalmente en la cuenca del río Nechí.

Los demás municipios como El Bagre, Cauca, Tarazá y Nechí, no han sido propiamente mineros, sino que en algunos de ellos se hizo la transición de los cultivos ilícitos de coca a la minería. Cauca, pese a recibir regalías, no tiene explotaciones de oro sino que, por ser el municipio centro de la subregión, se ha convertido en un centro de logística, servicios y comercio de insumos para la minería y también para el procesamiento de la base de coca.

Las economías criminales han sido estudiadas en las últimas décadas por ser un elemento esencial en el desarrollo de políticas públicas, en particular cuando existen convergencias con otras actividades económicas de carácter legal o informal, que hacen más complejas las estructuras del crimen, con lo cual se potencian sus medios de financiación y capacidad delictiva.

Para entender la dinámica de la economía en el Bajo Cauca debe detenerse la atención en analizar los conceptos de economía legal,

economía informal y economía criminal, dado que éstas dos últimas se relacionan como método de explotación de actividades ilegales y participación de la estructura criminal. Los sistemas de explotación más utilizados en los municipios auríferos del Bajo Cauca son el barequeo, motobombas y monitores, dragas y motores de succión, que han comenzado a usar los barequeros para incrementar la producción, el uso de retroexcavadoras y volquetas que usan los estables ilegales que no cuentan con licencias ambientales ni títulos, y las dragas, utilizadas por Mineros S. A., que tiene concesionadas las riberas del río Nechí entre los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí, teniendo su mayor territorio concesionado en jurisdicción de El Bagre.

En cuanto a la minería ilegal en los corregimientos de La Cauca, El Guáimaro, Barro Blanco y El Doce, y en las veredas Puerto Antioquia y El 15, se presenta la mayoría de entables mineros de gran escala, con retroexcavadoras, y de pequeña escala, como son los barequeros que utilizan las motobombas, siendo éstos los últimos de la cadena, al lavar las tierras removidas por los grandes mineros. Un estudio reciente de la Universidad Eafit de Medellín: Oro como fortuna⁸, exploró lo que ocurre con la producción y comercialización del oro en zonas de Zaragoza, Remedios y Segovia y concluyó, entre otras cosas inquietantes, que el comercio del oro ilegal es más rentable que la coca:

[...] los canjes y negociaciones ilegales construyen fronteras difusas con los intercambios mercantiles y políticos tradicionales de tal forma que, por ejemplo, las prácticas al margen de la ley invaden escenarios de declaración de regalías, asignación de recursos y contratación pública. Precisamente, el marco de análisis institucionalista y desarrollo permite comprender ese tipo de dinámicas en las que las reglas formales interactúan con las reglas informales y dan forma a la conducta individual y colectiva en un territorio.

⁸Jorge Giraldo Ramírez, et al, Oro como fortuna: instituciones, capital social y gobernanza aurífera colombiana, EAFIT, marzo de 2014. Consultar libro: <http://www.eafit.edu.co/centros/analisis-politico/Documents/2.%20Libro%20Oro%20como%20fortuna.pdf>

Los entables de minería que son controlados por las Agc, al mando de alias Seis-Siete antes de su captura⁹, representan una fracción importante de las finanzas de los Caparrapos, grupo armado hoy confrontado abiertamente con los gaitanistas y que tiene su centro de operaciones en el corregimiento de Piamonte, en Cáceres.

En relación la *economía criminal* no es posible ni conveniente separar de la producción de la comercialización así como, en algunos casos del consumo. Al hablar de economía informal e ilegal en países en desarrollo, donde la debilidad institucional genera incentivos para que los individuos ingresen y permanezcan en actividades informales o subterráneas -entendiendo estas últimas como aquellas estructuras productivas que se hacen al margen de la ley-, implica considerar una elevada probabilidad de que algunas estructuras informales se transformen en organizaciones criminales con un gran poder delictivo¹⁰.

Actualmente Mineros S. A., una de las empresas con mayor presencia en El Bagre, en donde tienes varios proyectos de explotación, tiene concesionadas varias hectáreas de tierra que, luego de ser abandonadas, son re-explotadas por mineros informales con dragas, motobombas y barequeo artesanal con uso de mercurio.

La participación de Zaragoza en la producción de oro en Antioquia ha sido importante, por lo que entre 1982 y 2010 tuvo un porcentaje de participación alto, pero en el periodo 2011-2016, contó con la incursión de nuevas estructuras criminales como Nueva Generación, combo que opera en el Nordeste antioqueño, Héroes del Nordeste, y las AGC que reclutaron a los desmovilizados del Bloque Mineros y del Bloque Central Bolívar, que tuvieron incidencia en Tarazá, Cáceres, Tarazá y El Bagre.

⁹Capturado el 4 de marzo de 2017 en Medellín, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, en el que participación 600 hombres y un helicóptero. Estaba entre los 10 hombres más buscados del Clan del Golfo (Los Urabeños) y se ofrecía una recompensa de \$115 millones de pesos por información que llevara a su captura. Está pedido en extradición.

¹⁰Jorge Giraldo Ramírez, et al, Oro como fortuna: instituciones, capital social y gobernanza aurífera colombiana, EAFIT, marzo de 2014. Consultar libro: <http://www.eafit.edu.co/centros/analisis-politico/Documents/2.%20Libro%20Oro%20como%20fortuna.pdf>

LA AMENAZA DE LA PAZ. ENTRE EL ORO Y LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES; NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO.

Estas subregiones de Antioquia cuentan, y han contado siempre, con una presencia alta de grupos ilegales al margen de la ley. La razón: tienen elevada actividad minera —específicamente oro— y las regiones del Norte —como Ituango, Briceño y Valdivia— son territorios abundantes en la reproducción de cultivos de hoja de coca.

Para controlar estas economías, los grupos armados ilegales se asentaron en el territorio. Las Farc tuvieron presencia en estas subregiones principalmente en los municipios Ituango, Valdivia y Anorí, y operaba por medio de la Columna Móvil Mario Vélez y los Frentes 18 y 36. El Frente 36 tuvo incidencia en áreas rurales de Anorí, Campamento, Angostura, Yarumal y también se extendió al Bajo Cauca a los municipios de Tarazá, Cáceres y El Bagre. Era el frente más activo del Bloque Efraín Guzmán —antes Iván Ríos— y lo comandaba Ovidio Antonio Mesa Ospina alias Anderson Carranza. Obtenía ingresos, supuestamente, por medio del «impuesto de guerra» que aplicaba a la minería y al cultivo y producción de base de coca.

En Ituango, en cambio, fue el Frente 18 el que controló —durante décadas— la siembra de la coca y la venta de la pasta base e hizo de este municipio un fortín armado y político. No obstante, luego de la firma del proceso de dejación de armas de las Farc, y a partir del mes de febrero de 2017, se han venido publicando informes que denuncian la inseguridad que se vive en este municipio.

Carnitas, Jeringa y Serpa, desertores del proceso de paz que se adelantaba con las Farc, y ahora adscritos, aparentemente, a las Agc, son quienes estarían sirviendo de enlace a los Pachelly de Medellín¹¹ con la compra de la pasta base para el procesamiento de coca, acrecentando de esta forma y fortaleciendo así el naciente cartel de Norte de Antioquia. Sin embargo, y según informe de *Verdad Abierta*, alias Serpa habría sido asesinado en la semana del 17 de mayo de 2017 y, por tal razón, cerca de dos docenas de hombres

se encontraban entonces vigilando la zona e intimidando a los pobladores.¹²

Alias Carnitas, tendría el control de las veredas Pascuitá, El Cedral y la Hundida, además de los corregimientos de El Aro y Santa Rita, éste último con antecedentes como la detonación de un artefacto explosivo y la amenaza a 20 maestros, en medio del paro convocado por Fecode, en mayo pasado de 2017.¹³

Representando ahora a las Agc, Carnitas —trabajando además de la mano con Jeringa— no sólo estaría facilitando la compra de la droga a los Pachelly sino que estaría trabando una alianza con esta banda, banda del Norte del Valle de Aburrá que, además, viene ingresando al Norte antioqueño vía Valle Toledo y San Andrés de Cuerquia para gestionar asuntos y actividades netamente de narcotráfico.

En resumen, el Norte de Antioquia hoy está en poder de las Agc y con el tiempo su presencia en el territorio va en aumento, la captura de Jaime Alberto Posada Quintero, alias El Zarco o El Tigre,¹⁴ el pasado 18 de julio en el municipio de Cañasgordas, lo demuestra. El Zarco era un jefe de las AGC en el Occidente y, según la inteligencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), habría llegado hace unos meses a Ituango con 25 hombres armados y disfrazados de campesinos, a la vez que habría ordenado una serie de asesinatos selectivos.

¹¹Análisis Urbano, Pachelly extiende su poder, 21 de julio de 2017. Ver: <http://analisisurbano.org/pachelly-extiende-su-poder/>

¹²Verdad Abierta, Seguridad en Ituango: ¿en alerta amarilla?, 19 de julio de 2017. Ver: <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6703-seguridad-en-ituango-en-alerta-amarilla>

¹³Análisis Urbano, ¿Quién y por qué quieren matar a los docentes de Ituango?, 24 de mayo de 2017. Ver: <http://analisisurbano.org/quien-y-por-que-quieren-matar-a-los-docentes-de-ituango/>

¹⁴Semana, Así fue la infiltración que permitió la captura de un jefe militar del Clan del Golfo, 17 de julio de 2017. Ver: <http://www.semana.com/nacion/articulo/capturan-a-jefe-militar-del-clan-del-golfo-en-ituango/532913>

Grupos armados ilegales en el Norte y Nordeste de Antioquia

En el Norte y el Nordeste antioqueño se hallaron dos clases de actores armados: grupos guerrilleros y bandas criminales o grupos armados organizados (GAO) ilegales. Ahora bien, aunque se hallaron estos grupos ilegales, no en

todos los municipios se presentan los mismos actores armados ni tienen la misma dinámica aunque posean la misma bandera. Los grupos armados que se presentan en el territorio se podrían clasificar de la siguiente manera:

GRUPOS GUERRILLEROS

ELN

Esta organización subversiva sigue operando a través del el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro que hace presencia en Segovia, Anorí y Valdivia, y ejerce accionar por medio de los frentes guerrilleros José Antonio Galán y Héroes y Mártires de Anorí tanto en Segovia como en Remedios. En Anorí está el frente guerrillero Héroes y Mártires de Anorí y las compañías Capitán Mauricio y María Eugenia Vega. Y en Valdivia, integrantes del Eln también operan y tienen fuerte presencia en la vereda el Raudal (ubicada en el corregimiento de Puerto Valdivia) y en otros territorios rurales cercanos a Valdivia.

BANDAS CRIMINALES O GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS

AGC

integrado en su mayoría por antiguos miembros de las Auc y se encuentran en los cinco municipios visitados. La fuerza pública las ha bautizado también como «Urabeños» y «Clan Golfo» y eso ha contribuido a generar confusión en la población que tiende a separarlas como si fueran diferentes. Controlan gran parte de la zona rural de Segovia y Remedios. En Anorí, cuentan con una base de operaciones en el sector El Charcón del corregimiento de Liberia, además de ejecutar acciones en los sectores Cedral y Tenche, sitios en los que hay actividad minera. En Briceño han hecho presencia en el casco urbano —al igual que integrantes de los Pachelly con quien tendrían alianza— y en las veredas cercanas a Alto del Chirí. También se han mostrado en Puerto Valdivia, especialmente en la parte urbana, y en la carretera principal que va hacia allá desde Valdivia. Y en Ituango se han manifestado en las veredas La Granja, El Cedral y en el corregimiento de Santa Rita, en estas últimas fuentes consultadas en el territorio afirman que las AGC cuentan con dos casas que les sirven de bases de operaciones. No está de más anotar, que a estos grupos los pobladores los llaman paramilitares, especialmente —como en el caso de Ituango— porque actúan en los mismos territorios donde ejercía hegemonía el Bloque Mineros de las Auc.

PACHELLY

Los Pachelly, en su alianza con las Agc, vienen creciendo y penetrando el Norte de Antioquia, están entrando por Valle Toledo y San Andrés de Cuerquia y ya se les ha visto en Briceño e Ituango. Con esta alianza, que fue acordada en Medellín y de la que también haría parte alias Tom Chatas (ala disidente de la Oficina de Envigado a favor del ingreso de las AGC a Medellín), se estaría formado el Cartel de Norte de Antioquia.

ZORROS

Se encuentran en Valdivia, en las veredas como Puerto Raudal y el corregimiento de Puerto Valdivia, lugares que hasta hace poco eran territorio de influencia de las Farc. Actualmente, los Zorros —que son apoyados por las AGC— se están disputando el poder contra el Eln en los territorios que dejó las Farc al replegarse en los ETCR. Esta zona ha sido de clásico dominio del Eln, a través del Frente Héroes de Tarazá, y ahora se quiere expandir para llenar el vacío de poder que dejó las Farc. Recientemente, incluso, llevó a cabo un atentado que, según ellos, se ejecutó para frenar el copiamiento que vienen haciendo las Agc en los territorios antes controlados por las Farc.

RASTROJOS, HÉROES DEL NORDESTE (HN), LA NUEVA GENERACIÓN (LNG) Y LA MANO QUE LIMPIA

Los Rastrojos son el grupo creado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar de las Auc, quien fue retirado y perdió los beneficios de Justicia y Paz una vez se demostró que seguía delinquiendo con el respaldo de este grupo. Los HN son disidencia de Rastrojos y hoy algunas autoridades los reseñan como un frente de las Agc; ambos operan en los sectores rurales de Segovia y Remedios. LnG es una aparente disidencia de Héroes del Nordeste y actualmente controla el casco urbano de Segovia y los barrios periféricos. Y, finalmente, en Segovia también se encuentra La Mano que Limpia, de la que no se conoce muy bien su origen pero siempre amenaza con panfletos a las personas que lideran asuntos sociales y referentes a las huelgas y protestas en el sector minero, como la Mesa Minera de ese municipio.

PRESENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL NORTE Y EL NORDESTE

La fuerza pública tiene presencia en estas subregiones a través de Ejército Nacional con el Batallón Vial y Energético No. 8 que está adscrito a la Décima Cuarta Brigada, el cual tiene como cobertura territorial el Nordeste antioqueño. El Batallón Bomboná también tiene cobertura sobre el Nordeste y diversas brigadas móviles que patrullan el Norte de Antioquia. La Policía Nacional está en todos los cascos urbanos en los cuales tiene una estación o comando de la policía. Y en Segovia, Anorí e Ituango hay presencia de Sijín.

ALERTA ITUANGO

En el municipio de Ituango, Norte de Antioquia, viene presentando una situación delicada en cuanto a seguridad, hasta el momento, en el último semestre de 2017, tres integrantes de la Farc —dos de ellos sujetos de amnistía e indulto, y todos en proceso de reincorporación— han sido asesinados en Ituango. Lo que podría indicar, debido a las características que reúnen las víctimas, que este municipio podría estar sufriendo una práctica de asesinato selectivo aunque se desconoce si obedece a algún interés.

No obstante, no debe descartarse, y aunque no se dice que esta sea la razón, que muchos de estos excombatientes cuentan con un pasado violento en la guerra y que dejaron muchos afectados a su paso, por lo que alguna de estas muertes también podría obedecer a la resolución de alguna vieja rencilla —o rencor— personal.

El modus operandi en los homicidios es el mismo, se presenta un ataque a bala tomando a la víctima en un estado desprevenido ya sea en un paso peatonal, una carretera o llamando a la puerta de su casa. Y todos empezaron a ocurrir una vez terminadas las Zonas Veredales, que fue cuando se dispuso la libre movilidad y se permitió que los excombatientes salieran de los espacios de concentración.

Los hechos ocurrieron con uno y dos meses de diferencia durante el último semestre de 2017, son:

* El 12 de julio de 2017, cerca de las 4 de la tarde, Juan Fernando Amaya, Indultado de las Farc y en proceso de reincorporación, fue interceptado y asesinado en la trocha que conduce del casco urbano de Ituango a la vereda Ceniza.

* El 14 de agosto de 2017, en horas de la noche y mientras estaba en la casa que habitaba en la vereda Santa Lucía —vereda donde está el ETCR—, Jesús Adán Mazo García, miembro de las Farc en proceso de reincorporación, fue asesinado con arma de fuego luego de que alguien llamara a la puerta de su casa y el intentara abrir.

* El 11 de noviembre de 2017, a las 8 de la noche, dos sujetos armados dispararon contra Daladier Ortiz Vázquez, miembro de las Farc amnistiado el 22 de noviembre de 2016 —bajo ley 1820 de 2016 y decreto 277 de 2017— y en proceso de reincorporación, mientras pasaba el rato la tienda La Mejor Esquina, ubicado en una vía peatonal y en pleno centro de la cabecera municipal de Ituango.

* En el asesinato de Daladier también resultaron varias personas heridas, porque los agresores dispararon sin precaución alguna: Yovanny Elias Tamayo, de 37 años; William Guillermo Ruiz García, de 40 años; Luz Nubia García Morales, 52 años; Ledy Andrea Múnera Lopera, de 36 años; Rubia Andrea Castrillón Jaramillo, de 21 años y en estado de gestación; Liliana Andrea Yepes Betancur, de 32 años.

De lo anterior se puede inferir que Ituango es un municipio que está en alerta y en el que la presencia institucional sigue siendo precaria, puesto que los asesinatos se dan con poco tiempo de diferencia, sorprende, incluso, la facilidad con que se perpetró el asesinato en la vereda Santa Lucía, en la que se encuentra el ETCR, ya que se da por supuesto que es un territorio especial con redoblada y especial vigilancia por parte de la fuerza pública.

Por otro lado, del último asesinato reseñado en 2017, debe hacerse relevancia sobre la cantidad de heridos que dejó: todos presentaron heridas de balas lo que indica que el ataque fue fuerte y tenía potencia armada. Al parecer, el cuadrante reaccionó y por eso hubo cruce de disparos, no obstante, en un municipio tan marcado por la violencia como lo es Ituango, la fuerza pública debería contar con más prudencia a la hora de actuar especialmente en los escenarios sociales donde hay presencia alta de habitantes. De acuerdo a testigos, no hay claridad sobre el origen de las balas que dejaron tantos afectados y, en un casco urbano no muy grande, los habitantes no se explican cómo se le pudieron escapar los agresores a las autoridades.

Orden público en el 2018

Al viejo conflicto del 2017, se sumó un nuevo ingrediente en lo que va recorrido de 2018: en el municipio se vienen presentando una serie de enfrentamientos armados y, según la población entrevistada, se están dando entre antiguas disidencias de las Farc contra estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Así mismo, ha aumentado el copamiento ilegal de territorios, las disputas por los mismos y el riesgo sobre las comunidades que allí habitan, lo que ya dejado víctimas inocentes, como la niña de 3 años que resultó afectada por la explosión de una granada de fragmentación en el sector conocido como Cuatro Esquinas, zona urbana del municipio de Ituango, y que posteriormente murió.

La violencia parece aumentar y todo lo que sucede es casi tenebroso y sólo refleja la incapacidad o falta de voluntad política del Estado para garantizar la seguridad en el territorio. El pasado 25 de febrero, en zona rural de la Vereda Chontaduro de este municipio, desde las 4:30 am, se presentó un enfrentamiento armado entre las disidencias mencionadas (que firman ser del Frente 36 de las Farc), contra estructuras de las Agc. Estos combates, que cada vez se presentan con mayor frecuencia, confirman la disputa que hay en Ituango por el control total territorial. Y, según fuentes oficiales consultadas, estos enfrentamientos ya han dejado por lo menos cuatro "paramilitares" muertos y, al parecer, otros tres heridos.



Fotos tomadas de El Colombiano.

A esta delicada situación también se suma el incremento de homicidios selectivos y la desaparición forzada de por lo menos una persona. Como un breve y necesario recuento, se anota que: el pasado 25 de febrero, a las 11:00 de la mañana, fue asesinado el campesino Joaquín Oliveros en la Vereda el Cedral, vereda que desde

el año pasado se viene alertando como un sitio delicado en cuanto a seguridad y orden público en diferentes informes regionales emitidos para la Fundación Paz y Reconciliación.

Así mismo, el 21 de febrero también de 2018, en el sector de La Granja, fue asesinado el también

campesino Jhuvan Mesa Ruiz, al que además se le evidenciaron signos de tortura, según lo denunció el Proceso Social de Garantías para la labor de líderes, lideresas, sociales, comunales, defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, que además afirmó que el homicidio fue cometido por integrantes de las Agc.

El 20 de febrero, en horas de la noche, también fue asesinado el campesino Elkin de Jesús González y también, al parecer, por integrantes de las AGC. El crimen ocurrió dentro de su casa, ubicada en la Vereda Palo Blanco, a donde los hombres armados ingresaron y lo ejecutaron. Y el 4 de febrero de 2018 fue cuando un grupo de hombres armados

dispararon y luego arrojaron un artefacto a una vivienda ubicada en el sector Cuatro Esquinas. Hecho que provocó la muerte de la pequeña Michel Dayana Rengifo Giraldo, de tres años de edad.

Y la desaparición forzada que se reporta ocurrió el pasado 26 de enero. La víctima es el campesino Ever Alexander Vergara, habitante de la Vereda Organí del municipio de Ituango, desaparecido y del que no tiene noticia alguna. Cabe anotar que, aparte de estos homicidios selectivos anteriormente mencionados, en lo que va de la firma de los acuerdos pactados en La Habana, en Ituango ya han sido asesinados cuatro miembros reincorporados del ahora nuevo grupo político Farc.



Fotos tomadas de El Colombiano.

Los eventos que se presentan en el territorio dejan claro que hay una debilidad institucional para contrarrestar el avance de las Agc y el de las supuestas disidencias del Frente 36 en el municipio de Ituango, grupos que, además, son quienes están imponiendo normas sociales, económicas y de comportamiento a la población rural. De acuerdo a fuentes de territorio consultadas, estas organizaciones ilegales están pretendiendo, incluso, controlar las formas organizativas comunitarias como las Juntas de Acción Comunal. Información

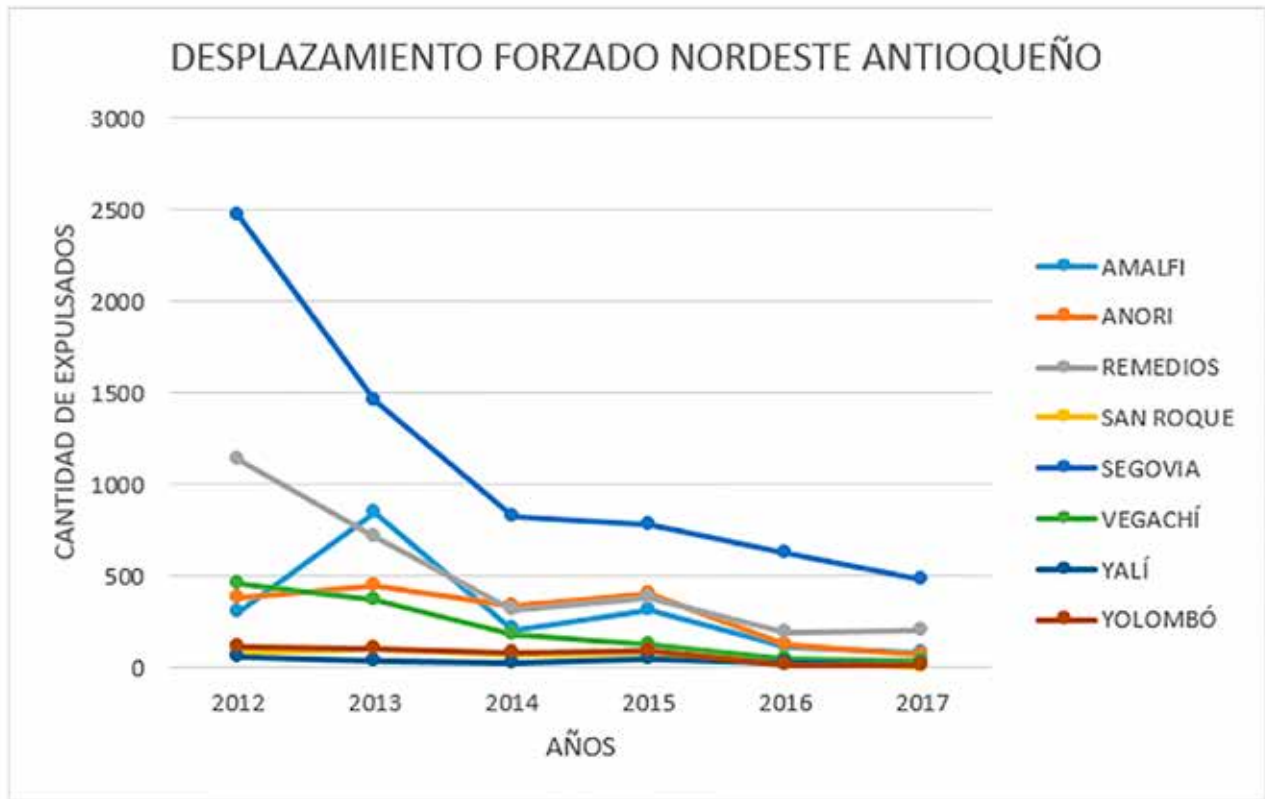
que confirma la Defensoría del Pueblo, ya que en su Informe de riesgo N° 037-17, de Agosto 14 de 2017, para Ituango, declara el alto nivel de riesgo que tienen los integrantes de las 119 Juntas de Acción Comunal y sus comunidades, por las intimidaciones, amenazas, extorsiones que están recibiendo, y los homicidios anteriormente mencionados.

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo en Ituango la Audiencia de Garantías y, según se consultó con fuentes del territorio, se discutió el

problema de orden público que vive el territorio pero fue evidente “el miedo de los campesinos que se atrevieron a denunciar situaciones de riesgo con relación a estos grupos armados”. El temor lo causa la expansión en Ituango de los grupos supuestamente disidentes del Frente 36 (aunque en la zona operó fue el Frente 18) y de las AGC.

De acuerdo con ellos, y con Defensoría del Pueblo, Ituango registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va de 2018,

y «existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas», desarraigo que sería causado por las disputas entre los grupos armados mencionados. Al parecer, en Ituango el desplazamiento no es masivo como en el Bajo Cauca sino que se da de tipo “desplazamiento gota a gota”, lo cual no causa mayor impacto a nivel departamental y genera un subregistro imposible de seguir ya que, además, a las familias desplazadas por vereda les da miedo denunciar.



«A esto se suma los confinamientos de la población y un control territorial que impide la libre movilidad de los habitantes, en especial en horas de la noche, y ejemplo de esto, es la prohibición que impusieron los paramilitares en los corregimientos de El Aro, Santa Rita y La Granja», denunciaron las organizaciones firmantes (Ver Anexo 2). Información que fue verificada consultando con fuentes de territorio las cuales indican que después de las 7 de la noche tienen prohibido el tránsito por las calles de estos corregimientos o el desplazamiento por las carreteras que llevan a ellos.

Así mismo, el documento también denuncia que las Agc están extorsionando el territorio y hoy obligan a pagar a los campesinos un monto por hectárea de tierra trabajada y por litro de leche comercializado (recordando acá que el Norte de Antioquia es la región lechera del departamento), y lo mismo sucede con los locales comerciales. «También contratistas de obras estarían pagando a los paramilitares, quienes en ocasiones, han atentado contra trabajadores de empresas que se niegan a pagar la extorsión», aseguraron.



Fotos tomadas de El Colombiano.

Y ya para cerrar, a esto se suma que, tanto el documento como fuentes consultadas del territorio aseguran que las Agc pretenden un control social absoluto, al punto de exigirles a los líderes sociales y comunales «copias de actas de

sus reuniones, realizar censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos los y las habitantes».

ECONOMÍAS ILEGALES EN EL NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO. LA FIEBRE DEL ORO

Hay actividad minera en Segovia y Remedios, municipios que producen el 11% del oro que se extrae en Colombia según cifras de la Agencia Nacional de Minería. No obstante, por esta superproducción minera, estos municipios han sido protagonistas de épocas lejanas y cercanas de violencia y sus territorios siempre han contado con presencia de grupos armados ilegales. Segovia, especialmente, ha sido y sigue siendo depositaria de grandes masacres.

Remitiéndose a una etapa más reciente en los conflictos relacionados a la minería, debe recordarse que cuando los paramilitares que operaron en el nordeste de Antioquia —bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco— se desmovilizaron en el 2005, en una zona rural de Remedios, un reducto de estos decidió continuar

en armas y seguir delinquiendo. Y como parte de sus acciones, extorsionaron a decenas de pequeñas minas de oro. Este grupo armado —y ejército personal de Macaco— adoptó el nombre de ‘Rastrojos’.

Debido a estas incursiones armadas en los territorios en donde los grupos ilegales van a cobrar extorsiones a trabajadores mineros, y a que aún hay mineros que no han legalizado su forma de trabajo, en el Nordeste, específicamente en los municipios de Remedios y Segovia, son frecuentes las protestas que se dan por parte de los mineros ya que las autoridades los consideran como «ilegales», y a veces criminales. Los afectados dicen que simplemente son mineros artesanales y que de eso vive el 80% de la población: se calcula que entre los dos municipios puede haber más

de 120.000 mineros, y que con su núcleo familiar podría considerarse una cifra superior a 200.000 pobladores, y por ello no ven una solución viable a la crisis recurrente.

Lo que desencadenó el más reciente paro minero en Segovia y Remedios fue el proyecto de ley de comercialización del oro que hace tránsito en el Congreso de la República. En el borrador del proyecto de ley se puede leer la modificación a uno de los artículos del Código Penal: «Artículo 338. Exploración o explotación ilícita de minerales. El que sin permiso de autoridad competente explore o explote minerales por medios mecanizados que puedan causar un impacto irreversible a los recursos naturales o el medio ambiente, incurrirá en prisión

de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes». ¹⁷ Y con este, casi todos los mineros se verían afectados penalmente, situación grave para una población que vive de ello.

Además, el reciente paro minero también coincidió con el Proyecto de Ordenanza presentado por el gobernador Luis Pérez ante la Asamblea, el cual busca prohibir el uso de mercurio y cianuro penalizando a quien los use. De manera autoritaria, Pérez Gutiérrez ha dicho que «el mercurio desaparecerá a las buenas o a las malas». ¹⁶ Esto acentuó la crisis que por ahora se resolvió pero el problema de fondo, qué hacer con los mineros artesanales o ancestrales, sigue ahí.

COCA EN EL BAJO CAUCA

En los seis municipios del Bajo Cauca: Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, hay cultivos ilícitos de hoja de coca. En unos con mayores hectáreas (Tarazá y Nechí) y en otros la disminución de la explotación de oro hace que se sustituya por los cultivos (Zaragoza y El Bagre). En Caucasia no se han identificado cultivos pero sí laboratorios para el procesamiento de la coca, además de ser centro de compra de suministros para el cultivo (fungicidas) y procesamiento (gasolina, cemento, ácido sulfúrico).

La información sobre destrucción de laboratorios para el procesamiento de la coca en los últimos dos años demuestra que Antioquia se ha convertido en un departamento que alberga todos los procesos que conforman la cadena de producción de la base de coca y la cocaína. Incluso, para 2009, en Antioquia se encontraron 336 instalaciones entre cocinas, cristalizadores y los llamados complejos cocaleros, y el 41% de estas estaban ubicadas en el Bajo Cauca.

En 2012, los municipios de la región que registraban más hectáreas cultivadas con coca son Tarazá con 495 has y El Bagre con 339, que suman el 54% del total de hectáreas cultivadas en Bajo Cauca, seguidos por Cáceres con 290 ha (19%), Zaragoza con 252 (16%) y Nechí con 173 ha (11%). Por su parte, Caucasia no registra cultivos de coca desde 2008. Finalmente, entre 2011 y 2012, en los municipios de Tarazá, Cáceres y Nechí, las hectáreas cultivadas disminuyen, mientras que en El Bagre y Zaragoza aumentan.

En el más reciente informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, publicado por la UNODC en julio de 2017, se discrimina el incremento de cultivos de coca en el Bajo Cauca de la siguiente manera:

Los municipios de Antioquia más afectados son Tarazá, Valdivia y Cáceres, donde se encuentra el 63 % de la coca del departamento (8.855 ha). Específicamente, los cultivos de coca están asociados principalmente a los centros poblados de Barro Blanco y El Doce en Tarazá y Raudal Viejo, La Caucana y Puerto Valdivia en Valdivia ¹⁷.

Antioquia es uno de departamentos en que se evidencia una mayor proporción de reincidencia del fenómeno con un 14% de incremento de los cultivos de coca, en relación con el 2015, en municipios como Briceño, El Bagre y Nechí.

¹⁵ Análisis Urbano, La criminalización de la minería en Bajo Cauca y Segovia, 26 de julio de 2017. Ver: <http://analisisurbano.org/la-criminalizacion-de-la-mineria-en-bajo-cauca-y-nordeste/>

¹⁶ Análisis Urbano, La criminalización de la minería en Bajo Cauca y Segovia, 26 de julio de 2017.

¹⁷ UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, publicado en julio de 2017. Consultar: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

En Briceño la reincidencia en cuanto a la resiembra de cultivos ilícitos es fuerte. Si bien la reincidencia es dispersa y se distribuye en la periferia de núcleos más consolidados, este comportamiento se configura como un alerta pues en estos territorios se estaba avanzando hacia una consolidación de territorios libres de coca.

También en el año 2016 se puso en marcha en Briceño un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Tal iniciativa empezó el 10 de Junio de 2016 y venía a fortalecer el esfuerzo del proyecto piloto de desminado humanitario que se adelantaba en la vereda El Orejón de ese mismo municipio.

Por otro lado, en cuatro ETCR, en un perímetro cercano de 0 a 15 km de distancia, se registra un aumento significativo del área con coca, en especial entre 2015 y 2016. Santa Lucía pasó de 9 ha a 14 ha. En La Plancha, en 2015, se registraron 108 ha y en 2016 se registra un aumento significativo con 453 ha. Gallo (Zona veredal que la Farc ya abandonó) pasó de 362 ha a 438 ha en 2016. Por último, en Caño Indio se registra el mayor cambio respecto a 2015: pasó de 1.845 ha a 4.917 ha en 2016. La Plancha, en Anorí, es la segunda más afectada; a menos de 5 km de distancia se pasó de 15 ha a 42 en 2016¹⁸.

Frente al control de los ingresos de dinero ilegal, en Anorí, donde hubo mayor presencia del Frente 36 de las Farc, persiste una alerta por la expansión que pueda hacer la columna del Frente de Guerra Héroes de Anorí, del Eln, quien podría entrar a manejar las finanzas que tenían las Farc, las cuales se calculan en los siguientes ingresos: «Una investigación de campo en los municipios donde el Frente 36 está activo indica que "Anderson" recauda US\$350.000 al mes de la minería de oro, otros US\$150.000 de la extorsión y al menos US\$200.000 del narcotráfico, principalmente de la venta de base de coca. Esto suma unos US\$700.000 al mes para un frente que cuenta con poco más de 100 guerrilleros y hasta 600 milicianos».¹⁹

No obstante, debe apuntarse, que de acuerdo a la información recogida en campo, en el sector conocido como Madre Seca de Anorí, el cual reúne 22 veredas, algunos líderes sociales se planteaban el pedirle al Eln que no abandonara la zona y llenara el vacío de poder dejado por las Farc debido a el inminente arribo que por el lado de El Charcón (corregimiento de Liberia) y Tenche venían haciendo los «paramilitares», que es como ellos llaman a las estructuras que aparentemente están adscritas a las Agc.

¹⁸ UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, publicado en julio de 2017. Consultar: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

¹⁹ Insight Crime: Centro de Investigación de Crimen Organizado. Bloque Iván Ríos: La división de combate más vulnerable de las FARC. Ver: <http://es.insightcrime.org/investigaciones/bloque-ivan-rios-division-combate-vulnerable-farc>

INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ; ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ.

PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.

A continuación se adjunta una tabla con información recolectada que daría cuenta del número de familias adscritas al programa piloto de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos en Antioquia, así como de los aportes que hasta el momento se han girado para el proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FAMILIAS EN ACUERDOS COLECTIVOS	HAS REPORTADAS EN ACUERDOS	FAMILIAS VINCULADAS	HAS REPORTADAS POR FAMILIAS VINCULADAS	Verificación UNODC	PAGOS (Familias inscritas pagadas)	Número de familias en validación para pagos
ANTIOQUIA	BRICEÑO	2.667	1.505	2.667	1.505	725	2.144	523
	TARAZA	3.337	3.582	2.337	2.782	1.134	1.660	677
	CACERES	2.000	1.480	2.000	1.480	1.468	1.293	707
	ANORI	2.828	4.128	2.828	4.128	1.456	1.257	1.571

Fuente: Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos

En este punto, igual, debe anotarse lo que se publicó en el informe de la UNODC:

«Caquetá, Antioquia, Vichada y Meta son los departamentos con mayor proporción de reincidencia en la afectación por coca. Un 6% del territorio que en 2015 había sido catalogado como abandonado, reincide con afectación por coca en 2016; este comportamiento implica problemas de sostenibilidad que se asocian directamente con la permanencia de las condiciones de vulnerabilidad en los territorios; este patrón favorece no solo la reincidencia en el área sembrada sino también la implantación de nuevas economías ilegales. Caquetá y Antioquia son los departamentos en los que se evidencia una mayor proporción de reincidencia del fenómeno con un 21% y 14%, respectivamente. En municipios como Briceño, El Bagre y Nechí en Antioquia, Valparaíso y Florencia en Caquetá; Puerto Lleras, Puerto Concordia y Mapiripán en Meta y Cumaribo en Vichada; la reincidencia es fuerte. Si bien la reincidencia es dispersa y se distribuye en la periferia de núcleos más consolidados, este comportamiento se configura como un alerta pues en estos territorios se estaba avanzando hacia una consolidación de territorios libres de coca».²⁰

²⁰UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, publicado en julio de 2017. Consultar: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

Conflictos asociados a la erradicación de cultivos de uso ilícito

El 26 de octubre de 2017, las organizaciones campesinas dedicadas al cultivo de hoja de coca se reunieron para manifestar su desacuerdo con la forma cómo se están intentando implementar los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial (PDET). Los campesinos advirtieron que éstos fueron lanzados de manera unilateral y no de manera coordinada y concertada con las comunidades en los territorios y núcleos zonales como indica el Acuerdo, especialmente cuando Anorí es un municipio priorizado en el mismo.

Las organizaciones firmantes, que además recogen a 21 integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) —casi todos presidentes— del Territorio, explicaron en detalle la problemática pero dejaron claro que no hay un diálogo fluido con la Agencia de Renovación del Territorio (ART),

y rechazan a Yolanda Reyes quien es la delegada de la Agencia, argumentando que la actitud de la funcionaria es arbitraria y no tiene voluntad de diálogo. Este problema ha entorpecido el correcto y pronto avance en materia de sustitución en esta parte del Norte de Antioquia por lo que la implementación en Anorí va a paso lento.

Se están generando tensiones en los territorios antioqueños porque la ART está llevando a cabo reuniones sin la presencia de organizaciones campesinas y de integrantes de Farc, estos encuentros están siendo considerados ilegítimos y nocivos para el éxito en la implementación de los acuerdos. Por lo tanto, Farc está haciendo un llamado a las comunidades antioqueñas, básicamente, a no “asistir a estas reuniones hasta que no se garantice una adecuada coordinación y participación de Farc y las organizaciones de los campesinos en estos espacios.

* Problemas de participación por precarias condiciones seguridad

Las débiles condiciones de los territorios en cuanto a seguridad ha perjudicado el diálogo con las comunidades. En Ituango, por ejemplo, —municipio que ya cuenta con el asesinato de tres integrantes de Farc en proceso de reincorporación— diez organizaciones sociales y miembros de la comunidad educativa se negaron a participar de la Audiencia de Garantías para la subregión del norte de Antioquia, que se citó para el 10 de noviembre de 2017 en dicho municipio.

Entre los argumentos para no asistir a la audiencia, las organizaciones citaron el asesinato de dos líderes cocaleros de la región: Miguel Emiro Pérez en Tarazá y Ramón Alcides García en Briceño.

De acuerdo un líder de las organizaciones sociales que no asistieron a la audiencia, «su ausencia debe reflejar la desconfianza que tenemos y alertar sobre el precario estado de los Derechos Humanos en el norte de Antioquia». Así mismo, advierte que su fuerte oposición a la erradicación forzada de los cultivos, «porque está en contravía de los acuerdos y es un incumplimiento a la sustitución voluntaria que pactamos», sólo los expone y los deja vulnerables ante «la mano negra que los está asesinando».

En este punto vale la pena volver a poner un párrafo extraído de este mismo informe, del punto 1. en el que se habla de la dinámica de seguridad del Bajo Cauca:

«Un líder cocalero de nombre Alberto Ballesteros, adscrito a la Coccam, fue entrevistado para este reporte el viernes 16 de febrero, justo después de terminar una reunión de estos líderes con la Defensoría Departamental en el que expusieron sus problemas de seguridad a la institución. Ballesteros se destacó en la reunión por ello se procedió a su entrevista logrando obtener de él un mapeo de la zona en cuanto a problemas sociales y de orden público. No obstante, al siguiente día, sábado 17 de febrero, Ballesteros llamó notoriamente afectado y asustado para decir que, como a tres cuadras del lugar donde se le hizo entrevista, y justo después de la misma, fue interceptado por dos hombre en una moto que le golpearon hasta casi dejarlo inconsciente y le advirtieron que era por “sapo” y que si seguía hablando básicamente lo iba a lamentar. Así mismo, una semana atrás de la entrega de este informe, y cuando el canal caracol emitió el programa especial sobre la situación del Bajo Cauca, que contó con el acompañamiento de Pares, pero en el que el canal no protegió a la fuente, Ballesteros fue agredido y se le intentó asesinar, logrando escapar y se vio obligado a desplazarse forzosamente de su municipio y de su hogar.»

Asesinatos a líderes de la sustitución voluntaria de cultivos

Sin identificarse aún si se va a convertir en una práctica sistemática, en Antioquia ya han sido asesinados dos líderes cocaleros defensores de la sustitución voluntaria. El domingo 22 de octubre, en Tarazá, fue asesinado Miguel Emiro Pérez, líder social de la vereda La Unión y partícipe en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos e integrantes del grupo político Marcha Patriótica.²¹

Igualmente, el 27 de octubre de 2017, Ramón Alcides García, reconocido líder impulsor del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Briceño y también integrante de Marcha Patriótica, fue asesinado cuando se dirigía a su casa en la carretera que conduce a la vereda Alto de Chiri.²²

REINCORPORACIÓN

En cuanto a la existencia de proyecto productivos en Antioquia, y de acuerdo a lo informado por Mayerli Gómez, encargada de Farc para Reincorporación en el departamento, “de los 35 millones que dieron para los seis espacios territoriales ubicados en Antioquia, hay unos que están produciendo pero los otros no. Por ejemplo, el de Llano Grande, que consiste en la cría de gallinas ponedoras y porcicultura, las gallinas ya empezaron a dar producto y los cerdos en cría están de buen semblante”. En Mutatá también tienen pollos y están haciendo unas peceras pero apenas las están haciendo. En cuanto a las ponedoras de Llano Grande, ya se han vendido unos huevos pero se dieron cuenta que se dieron a muy bajo precio por tanto están mirando qué hacer y cómo aumentar la ganancia. Por ahora, optaron en el espacio territorial por repartir los huevos a cada socio porque están priorizando el autosostenimiento. Por lo que no es un proyecto productivo rentable por ahora. De acuerdo con Gómez, por ahora son proyectos de autoabastecimiento pero que esperan formular bien para que genera ganancia.

Los proyectos los hicieron por prioridad de zona, ejemplo, hay otros espacios que no cuentan con agua entonces priorizaron el tema del acueducto aunque medianamente artesanal. Lo que indica que la producción en la zona es de tipo de atención de necesidades básica, más no proyecto productivos rentables.

Para estos proyectos mencionados, los dineros de financiación los dio el gobierno Sueco pero el PNUD los maneja. No obstante, no hay una información clara de todos los seis espacios. Por

ahora no están recibiendo ningún otro apoyo. A nivel de Antioquia se están buscando aliados pero hasta el momento no se ha logrado nada.

Las mujeres están estudiando y participando de los proyectos. No hay un dato general sobre las mujeres de los seis espacios territoriales pero según la encargada de reincorporación, cerca de un 30 por ciento de participación de todas las actividades está representado en mujeres.

En cuanto a la bancarización, ya se superaron los problemas, faltan muy pocos por bancarizar, aclara la encargada de reincorporación en Antioquia, y “esto es porque a algunos muchachos ha sido imposible encontrarlos”, muchachos que salieron de la zona y, al parecer, se les perdió el rastro. Y hay otros muy pocos que faltan por firmar pero la mayoría de reincorporados de Farc ya están bancarizados, por tanto, esta nueva organización política no lo considera un problema. Advierten que el Espacio Territorial de Vidrí es el más perjudicado en este aspecto aunque están haciendo todo lo posible por superar el inconveniente.

El subsidio económico de 8 millones de pesos “no se ha recibido porque no cuentan con tierras para trabajar y, como se está en ley de garantías, se pasó el tiempo de contratación de arriendo de esas tierras y sobre las mismas es que va el proyecto de los 8 millones. Por lo que hasta el momento no se ha hecho nada y nadie ha recibido este subsidio”, explicó la delegada de Farc.

La renta básica quedó en 700 mil pesos y la están

²¹El País, Investigan asesinato de líder social en tarazá, Antioquia, 22 de octubre de 2017. Ver: <http://www.elpais.com.co/judicial/investigan-asesinato-de-lider-social-en-taraza-antioquia.html>

²²El Espectador, Asesinan a líder de sustitución de cultivos en Antioquia, 30 de octubre de 2017. Ver: <https://www.elespectador.com/noticias/paz/asesinan-lider-de-sustitucion-de-cultivos-en-antioquia-articulo-720573>

recibiendo de manera mensual. Casi no tienen problemas con su recepción pero a veces se le atrasa a un par de muchachos de la organización, se les atrasa un par de meses, pero no tienen claridad sobre el porqué. No obstante, este inconveniente ahora es más una excepción que la regla, diferente al año pasado. Una vez bancarizados se resolvió el problema.

Recibieron también la asignación única de normalización (2 millones de pesos), como indica su nombre, una vez. De ahí en adelante han recibido la renta básica. La recibieron casi todos, los únicos que no la recibieron son las 350 personas que llegaron como reinsertadas a las zonas pero que hicieron su reincorporación. De igual forma se están haciendo los trámites para que la reciban, el problema, al parecer, es que ellos tienen doble acreditación.

En cuanto a si reciben otro recurso por parte de cooperación internacional, sector privado, fundaciones o organismos multilaterales, la delegada de Farc señala que "Lo único que recibimos por el momento es un curso de capacitaciones de promotores que fue promovido por la Gobernación para dos espacios: La Plancha (Anorí) y Llano Grande (Dabeiba). Todavía no se tiene la totalidad de cobertura, porque apenas empieza, pero es para 90 alumnos aunque no se sabe si lleguen todos. El

Sena sigue yendo a capacitar en algunas cosas y acude si Farc le dice que necesita algo en específico, pero no reciben ningún otro tipo de recurso y menos monetarios. Con las ong's o fundaciones se han cruzado pero en reuniones y nada más".

Sobre Ecomun, en algunas partes están funcionando las cooperativas pero en otras se está complicando porque no se entendió muy bien. De acuerdo con la delegada, "el tutor que mandaron a las regiones como que nos embolató más pero en unas partes sí ya comenzó la cooperativa". Y hay otras dificultades, en Dabeiba intentaron formar tres cooperativas pero "no les alcanzó y apenas lograron formar dos", ahora están mirando cómo resolver o si sólo se quedan con esas dos cooperativas, sólo les falta "firmar unos papeles". En Ecomun también hay proyectos individuales, por ejemplo, muchachos que de su misma renta básica están aportando 200 mil pesos cada mes a la cooperativa para la construcción de la tienda y de las peceras. "Esto lo están sacando de la renta básica porque en algunos espacios todavía llega comida, entonces para ir invirtiendo y no quedarse sentados". Por ahora los proyectos de cría de gallina ponedora y porcicultura no están en Ecomún porque no se ha terminado de organizar esa cooperativa, pero una vez esté lista, la idea es enrutar los proyectos en ella.

* Problemas frente a la reincorporación

TIERRAS

El mayor problema que está teniendo la reincorporación en Antioquia, según la encargada del tema por parte de Farc, son las tierras. No tienen tierras para trabajar y no saben cuánto se va a demorar por el tema de la ley de garantías. No han podido arrendar tierras, sólo se logró arrendar en Ituango pero porque están en gestión de compras. El resto de espacios no tienen los documentos, o no tuvieron los dineros para arrendar. Por tanto, si no tienen Tierras, no tienen Ecomún; y si no tienen Ecomún, no tienen nada.

SALUD

Los otros problemas que enfrenta la reincorporación en Antioquia a la luz de lo acordado en La Habana es la salud y la educación. En cuanto a la salud, el problema es que la EPS los atendía con los seudónimos, pero una vez hicieron la cedula perdieron la atención médica porque el nombre ya no figuraba en los registros. Con el nombre propio quedaron borrados y perdieron la EPS. No tienen un porcentaje sobre cuántos son los afectados pero aseguran de que cuentan con incapacitados en los espacios de reincorporación que no han podido ir al médico. Cuando hacen el reclamo para volver a ingresar al sistema EPS, "siempre nos dicen que no hay plata".

EDUCACIÓN

En cuanto a la educación, lo ocurrido fue que llegaron a matricular a los espacios territoriales en noviembre de 2017, fecha en que la mayoría de los reincorporados se encontraban por fuera de los espacios territoriales de capacitación. Por tanto, sólo matricularon a 60 personas y en este momento son más de 100 personas con deseos de estudiar y sin acceso a la educación. “A duras penas nos dan clases de hora u hora y media pero en ese tiempo no es mucho lo que se aprende, nosotros estamos hablando de educación de verdad, de terminar la primaria básica y el bachillerato”.

VÍCTIMAS

En cuanto a reparación simbólica de víctimas, el 14 de abril de 2018, en el Espacio Territorial del municipio de Remedios, nordeste antioqueños, un grupo de 25 excombatientes de las Farc y de las autodefensas, se reunieron junto a 140 víctimas del conflicto, para llevar a cabo el primer encuentro por la reconciliación y a favor de la convivencia en esa zona.

“Que se comprometan a no repetir la violencia para que otras personas no sufran lo que vivimos las víctimas y podamos vivir en paz todos”, fue el clamor de las víctimas, que hicieron a un lado el dolor y apostaron por la convivencia en su territorio. El encuentro, en un principio fue privado y luego pasó a ser un acto público con muchos momentos de desahogo personal, se constituyó en un pacífico encuentro cara a cara en el que las víctimas se encontraron con sus victimarios.

La actividad estuvo dirigida por el equipo de psicólogos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y hubo momentos de confrontación así como de sanación para las víctimas, una de ellas narró frente a los excombatientes la forma cómo le mataron al hijo y al esposo y lo que después sufrió porque la desplazaron, acto seguido, y a pesar del evidente dolor, les pidió que se comprometieran con la no repetición y que no volvieran a hacer daño, “que se arrepientan de corazón para que vivamos en paz, porque yo no quiero que otra madre sufra lo que yo pasé”.

Este es el primer encuentro masivo que se da en el país entre las víctimas y los victimarios de ambos bandos, lo cual se muestra como un hecho positivo y necesario para la reincorporación a la sociedad de los excombatientes y para la sanación y el desahogo colectivo de las víctimas. Y al final, aunque no fue un acto de perdón, algunos de los desmovilizados de las autodefensas pidieron disculpas por sus crímenes. Todos coincidieron en comprometerse con la no repetición y aportar a la verdad que reclaman las víctimas, con acciones como la búsqueda de los desaparecidos en esta región de Antioquia.

Remedios es uno de los cinco municipios focalizados en Antioquia en la etapa del posconflicto para la implementación de la estrategia de Reparación Integral, Convivencia y Paz; junto a Anorí, Apartadó, Ituango y Vigía del Fuerte. Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, indicó que “esta iniciativa se aplica en las poblaciones más afectadas por el conflicto armado mediante acciones sicosociales para la recuperación emocional, talleres de formación financiera y, al final de 9 encuentros grupales, se entregarán las indemnizaciones económicas como parte de la reparación individual”. Para la implementación de la actividad, se aliaron la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Alta Consejería para el Posconflicto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).